

LA PATRIA PERTENECE A TODOS LOS CHILENOS

(ACUERDOS POLITICOS-PROGRAMATICOS DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE)

**Carácter de Nuestro Congreso**

Las transformaciones ocurridas en el mundo, desde los años setenta a la fecha, así como la profundidad de los cambios económicos y políticos que se han producido en Chile representan un desafío inédito para nuestro Partido.

Construir una izquierda progresista para el siglo XXI requiere nuevas formulaciones, teóricas y prácticas, de gran envergadura, para acompañar las luchas del pueblo chileno en el presente y el futuro. Incluso nuestro propio lenguaje y formas de hacer política deben ser objeto de profundos replanteamientos. Sin embargo, lo que persiste inamovible en el pensamiento socialista es el ideal de una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, aún cuando su materialización se nos presente distante en el momento actual.

En tal espíritu, el XXV Congreso General Ordinario asume el presente documento como las Bases Políticas-Programáticas del Partido Socialista de Chile. Así mismo, el Congreso valora como un especial aporte el Documento de Discusión que sobre Proyecto Socialista redactó la Comisión Nacional, constituida para tal efecto por la Comisión Política y reconoce, además, los aportes de todas las instancias partidarias.

El XXV Congreso convoca a todos los militantes a seguir enriqueciendo el bagaje político y cultural del socialismo chileno, fortaleciendo su reflexión teórica y la práctica social, a fin de consolidar la vocación popular y transformadora del Partido. Todo ello con el propósito de constituirnos en actor decisivo de la configuración de un Chile moderno y de una sociedad justa y libertaria.

**El Socialismo Chileno: Historia y Presente**

El Partido Socialista de Chile nació a la vida política signado por la crisis mundial de los años treinta, la guerra civil española y en medio de los dolores del fascismo. Su origen social e intelectual, así como la experiencia política de sus fundadores, marcada por la crisis del estado chileno de fines de los años veinte y comienzos de los treinta, lo comprometió con los obreros, las capas medias empobrecidas y los intelectuales.

A la derrota del fascismo y con el término de la segunda guerra el mundo se presentaba dividido en dos bloques, con ideologías y concepciones económicas radicalmente distintas. En los países del capitalismo céntrico se conformaron fuertes estados nacionales, con mercados internos protegidos; políticas sociales de fomento del

empleo y que garantizaban la seguridad social; con poderosos sectores industriales y sólidas organizaciones obreras. Se conformó así un Estado del Bienestar que también se reflejó, aunque de manera deformada, en la periferia capitalista. En efecto, en ésta se configuró un estado vigoroso, productor y regulador de la vida económica pero que, a diferencia de los países centrales, no tuvo la capacidad material para asegurar el empleo y promover el desarrollo social. En los países del socialismo real el modelo de desarrollo se basó, en cambio, en la planificación central, con un estado productor y organizador de todas las actividades económicas y con formas de subsidio generalizado en las áreas sociales.

En este marco, de un mundo bipolar, el socialismo chileno rechazó la implantación de un poder despótico en la URSS, así como la sostenida intromisión de ésta y de los Estados Unidos en los asuntos propios de otras naciones. Ello explica los postulados de autonomía del PSCH frente a los dos bloques en pugna y su compromiso latinoamericanista, inspirado en la tradición bolivariana. Los acontecimientos mundiales, del pasado y el presente, han confirmado la necesidad de una vigorosa autonomía nacional con la preservación de un sólido internacionalismo, en favor de la paz, la amistad y cooperación entre las naciones.

El Partido Socialista y el conjunto de las fuerzas políticas progresistas han desarrollado un aporte indiscutible a la modernización de Chile. A diferencia de los postmodernos y neoliberales de hoy, los socialistas chilenos hemos vinculado estrechamente siempre el crecimiento económico, el desarrollo social y la democratización de la vida política. Desde la conformación de los gobiernos de Frente Popular hasta la ascensión al poder de Salvador Allende, el pensamiento y accionar político de los socialistas chilenos se inscribe en las

grandes luchas en favor del fortalecimiento del movimiento sindical y las leyes laborales que amparan sus derechos; el voto a la mujer, a los analfabetos y a los jóvenes; la formación del Servicio Nacional de Salud y el Sistema de Seguridad Social.

Además de estas realizaciones sociales y de la lucha por la ampliación de las libertades públicas, fueron los sectores progresistas de Chile quienes, mediante la CORFO, y ante la debilidad del empresariado nacional, impulsaron la formación de las industrias básicas como la energía eléctrica, el acero, el petróleo, el azúcar y la pesca, así como dotaron al país de una infraestructura básica. Asimismo, la reforma agraria y la nacionalización del cobre representaron transformaciones fundamentales para sentar las bases de una agricultura exportadora moderna y para la afirmación de la soberanía nacional sobre los recursos mineros.

De tal manera, la presencia política socialista y de los sectores progresistas está íntimamente ligada a la modernización de Chile.

El dinámico crecimiento económico del país, así como el desarrollo social y democrático de las décadas previas al régimen militar, sólo es negado por los fundamentalistas neoliberales. Más aún, a diferencia de lo que piensan los sectores conservadores, el propio modelo económico actual no hubiese sido viable sin las bases de acumulación industrial fundadas desde los años treinta a los setenta y sin la distribución de la tierra que dio origen a una agricultura moderna exportadora. Del mismo modo, fueron los niveles de conciencia, el desarrollo social y político gestado en Chile en décadas de historia, gracias a la izquierda y a los sectores progresistas, los que permitieron recuperar el estado de derecho y conformar hoy día una sociedad viable y democrática.

Ni violencia, ni guerrilla, ni acción insurreccional alguna permitieron el triunfo de Salvador Allende. Un proceso electoral limpio y encuadrado en la institucionalidad concretó las aspiraciones que por décadas se plantearon los trabajadores chilenos. A fines de los años sesenta, en un mundo en que la radicalización se presentaba en Francia, Checoslovaquia, así como en las propias universidades norteamericanas y en que la protesta y la guerrilla antisistema eran una realidad en toda América Latina, Asia y Africa, el triunfo electoral de la Unidad Popular expresó simplemente el signo de los tiempos y el de nuestra propia historia.

La Unidad Popular se vio enfrentada a una implacable oposición, la que junto a sus propios errores impidió plasmar la riqueza de sus planteamientos en un proyecto viable, una estrategia coherente y una alianza social y política mayoritaria. La división de los sectores sociales y políticos de centro e izquierda generó una polarización que facilitó la acción del poder militar convocado por las fuerzas reaccionarias.

El término de la experiencia del Gobierno de Salvador Allende dio paso a casi dos décadas de dictadura militar. Esta sí que utilizó la violencia, estimulada por la revancha de la derecha económica y política, con una represión injustificada sobre un pueblo inerme. El régimen militar arrasó con las instituciones y movimientos democráticos, iniciando una transformación profunda en el país que modificó las bases de su funcionamiento en el orden económico, político, social e institucional.

La larga lucha para terminar con la dictadura convocó, en el segundo lustro de los ochenta, a las más amplias fuerzas sociales y políticas, materializando el triunfo del NO en el plebiscito de 1988 y luego al ganar las elecciones y conquistar el gobierno con el presidente Aylwin en marzo de 1990. Los dolores que había provocado la dictadura, así como las lecciones que ello arrojó para el Partido Socialista y la Democracia Cristiana sobre los errores del pasado permitieron la gestación de la más amplia alianza progresista que se haya constituido en el país a lo largo del presente siglo: la Concertación de Partidos por la Democracia.

## La Epoca Actual

La Declaración de Principios de 1933 y el Programa de 1947 acompañaron las luchas del pueblo chileno por largas décadas, respondiendo a una época de auge nacional y popular en los cinco continentes y a la división del mundo en dos bloques. La emergencia de los gobiernos de Reagan y Thatcher en el capitalismo anglosajón, así como la debacle del socialismo real, simbolizan dramáticamente el inicio de un nuevo período histórico para la humanidad, que plantea a los socialistas nuevos desafíos.

La debacle del "socialismo real", a fines de los ochenta, representa la culminación del fracaso histórico de una economía y un sistema político que agotó sus energías en el funcionamiento de la industria pesada y bélica, que no respetó las necesidades de consumo de la población y despolitizó a sus ciudadanos, al restarle el inalienable derecho a las libertades públicas.

Por otra parte, quedó en evidencia que la "crisis final" del capitalismo, anunciada sistemáticamente por teóricos y políticos de la izquierda, había sido una caracterización manifiestamente errónea. En realidad, la crisis del capitalismo pudo ser enfrentada mediante la redefinición de sus patrones productivos sobre la base de nuevas tecnologías, replanteándose, además, el modelo social mediante la restricción fiscal y el ajuste radical del Estado del Bienestar. Los desafíos de la competitividad internacional y los problemas fiscales abrieron una etapa de cuestionamiento de las diversas variantes de "estados del bienestar", incluidas las experiencias socialdemócratas europeas.

En tales condiciones, hoy se puede hablar de un capitalismo post-industrial, informatizado y robotizado que ha profundizado su alcance global. Desde luego, estas nuevas particularidades no han modificado la esencia del mismo: vale decir, la lógica de la ganancia, la relación salarial y el poder centrado en la propiedad de los medios de producción. De tal manera, nos encontramos en un nuevo período de acumulación capitalista, sólido en lo económico y con iniciativa en lo ideológico.

Una vertiginosa revolución científico-técnica ha modificado las formas de producción y el propio funcionamiento de la economía internacional. En los países desarrollados ello se manifiesta en el predominio de procesos productivos automatizados, en la aplicación de la informática en todos los niveles de la vida económica y social, en la disminución de la utilización de los recursos naturales en la actividad productiva, en el mayor peso del conocimiento en la vida económica y en nuevas formas de organización al interior de las empresas. El paso del capitalismo industrial al capitalismo robotizado-informatizado ha tenido efectos sociales y políticos de significación, dentro de lo cual cabe subrayar la disminución del peso de la clase obrera en los procesos productivos, el crecimiento del sector servicios y una

menor capacidad negociadora de los sindicatos.

Paralelamente, se acelera la internacionalización de la economía mundial en el comercio, las finanzas y la producción, estimulada por una creciente globalización de las comunicaciones.

En el plano financiero, se han multiplicado los flujos a través de las fronteras nacionales. Por una parte, esto hace más eficiente al capital financiero, permitiéndole a la banca internacional una mejor localización de sus recursos pero, por otra parte, produce efectos especulativos que afectan la estabilidad monetaria de las economías nacionales y fija límites a las políticas económicas de cada país. Así mismo los flujos de inversiones, bienes y servicios de origen extranjero obligan a

patrones más estrictos de competencia cuyo resultado es, la mayor parte de las veces, el aumento de los atropellos y desconocimiento de los derechos de los trabajadores, como recurso habitual para responder a las mayores exigencias de competitividad.

Por otra parte, el cambio tecnológico y la globalización representan un serio desafío para las economías débiles en orden a mejorar sus sistemas educacionales, asignar recursos para el avance técnico-científico, luchar por incorporar valor agregado a sus productos y fortalecer los derechos de los trabajadores.

La globalización, impulsada por los países céntricos que controlan la producción de ciencia y tecnología, plantea nuevos y serios desafíos a la soberanía nacional y a la identidad propia de cada pueblo.

Al adquirir un mayor peso los factores externos en las estrategias de desarrollo, se estrechan los espacios de maniobra nacionales. En este marco, la intervención del Estado se encuentra restringida a aquellos ámbitos "aceptados internacionalmente", tales como infraestructura, salud, educación, permitiéndosele un papel solo regulador sobre las actividades productivas.

La globalización, especialmente a través de los actuales sistemas de comunicación, permite nuevas formas de dominación que no son ya la colonialista o imperialista tradicionales. En efecto, la gigantesca capacidad hegemónica de los EEUU le permite proyectar sus valores, su tecnología e imágenes, a los lugares más recónditos de la tierra. Por otra parte, la conexión individual por computadora, con sistemas de información en red, modifica las formas tradicionales de educación de carácter colectivo, lo cual afecta la socialización, privatizando los procesos de aprendizaje. Por otra parte, las exigencias de éxito que impone un agresivo mercado presiona traumáticamente a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes, con consecuencias negativas para la vida social: no se puede gastar tiempo en solidaridad, en política, en desarrollar acciones en favor de los demás. En el caso de nuestro país, ello

se ha expresado en que los chilenos hemos dejado de ser una nación amable y fraterna para pasar a ser un país marcado por el stress, la angustia del consumo y la competencia.

La globalización cultural, inducida por la revolución en las comunicaciones, implica grandes oportunidades para ampliar el conocimiento y ensanchar los horizontes de las personas. Pero también entraña amenazas considerables a la preservación y desarrollo de la diversidad cultural, que es parte fundamental del patrimonio de la humanidad, así como pone en evidencia la influencia abrumadora del poder económico en la formación de opiniones, actitudes, patrones de comportamiento y de consumo. La internacionalización de las comunicaciones, y el control que ejerce especialmente los EE.UU. sobre éstas, representa un verdadero desafío para el estado nacional como responsable por la defensa y promoción de los patrones histórico-culturales. El vértigo del patrón consumista, ofrecido a través de las comunicaciones globales, genera frustraciones traumáticas en aquellos sectores que no pueden acceder a ese tipo de consumo. De tal manera, la defensa de las identidades y raíces nacionales le entrega al Estado responsabilidades inéditas en esta época de globalización.

La familia también sufre modificaciones en la sociedad postindustrial y en el mundo globalizado. Hasta hace pocas décadas, el concepto fue el de la familia agraria, numerosa, patriarcal y machista. Hoy es el de familia pequeña, nuclear, urbana, con serios cuestionamientos al dominio patriarcal y con variedad de vínculos: con o sin matrimonio, con o sin hijos biológicos, muchas veces con sólo uno de los padres. Nuestro pensamiento libertario debe asumir estas nuevas realidades, respetarlas y otorgarles el reconocimiento social y legal que ellas ameritan.

Las transformaciones ocurridas y los ajustes del capitalismo no han reducido su rasgo esencial, concentrador de riqueza y poder en un sector minoritario de la sociedad, lo que sigue generando inequidades y desequilibrios en el cuerpo social. En efecto, dentro de tales transformaciones se destaca la importancia del conocimiento como factor dinámico en la actividad productiva y la vida social. No obstante, este nuevo factor de acumulación también se reparte desigualmente, a nivel nacional e internacional y, consecuentemente, la riqueza y el poder siguen siendo los factores fundamentales en la reproducción capitalista.

EL socialismo moderno no puede rechazar la globalización, añorando el pasado. Pero, del mismo modo, el socialismo moderno no puede aceptar que la economía y los valores nacionales sean avasallados por el poder hegemónico de las transnacionales y las potencias dominantes. En realidad, una estrategia de desarrollo nacional debe incorporar una concepción de alianzas para enfrentar a países y empresas poderosas, a objeto de maximizar nuestra presencia y reducir los efectos negativos derivados del mercado mundial.

Los socialistas no estamos ciegos ante la realidad de una nueva época, pero como nos sentimos parte de la historia, y queremos construirla, rechazamos el punto de vista de algunos intelectuales y políticos, tanto de las derechas como de las izquierdas, que asumen la nueva realidad sin un espíritu crítico haciendo apología del mundo global y asumiendo el dogma de la eficacia como el único criterio para valorar al ser humano y su existencia.

La renovación y potenciamiento del pensamiento socialista pasa, por una parte, por el entendimiento pleno de la nueva época que vivimos pero, al mismo tiempo, por la cabal comprensión de sus contradicciones, especialmente de aquellas que afectan al mundo popular y a sus economías y culturas nacionales. Más aún, cuando los efectos de la globalización han generado un amplio consenso sobre la urgencia de los temas sociales los sectores progresistas y de izquierda tenemos la obligación de fortalecer los valores y principios que expresan la dignidad de las personas y su anhelo de vivir mejor. Esos principios y valores representan la solidaridad y no el individualismo; el sentido de futuro y no el conservadurismo, la democracia y no el autoritarismo.

En este marco, nuestra lucha debe asumir los aspectos positivos de la globalización e impedir aquellos que afectan los intereses nacionales o que atentan contra nuestra historia y cultura. Los socialistas no aceptamos la sumisión al mundo global. Lo que queremos es construir nuestra propia participación en ese mundo.

### **Hegemonía y Contradicciones en un Mundo Unipolar**

En esta época, la política internacional se perfila con nuevos contenidos. El fin de la URSS le permite hoy día al poderío militar e ideológico de los EE.UU. desempeñar un nuevo rol en el panorama mundial. Terminada la bipolaridad, los EEUU actúan sin contrapesos en los asuntos mundiales lo cual se expresa en su determinante influencia en las propias Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, cuyas manifestaciones más evidentes se han presentado en Irak, Somalia y Bosnia. En América Latina, las expresiones hegemónicas se han endurecido con el reciente recrudecimiento del embargo a Cuba mediante la ley Helms-Burton y su manifestación extraterritorial que castiga a empresarios de terceros países que comercian con Cuba, así como con la política de "certificación", que castiga a Colombia y otros países de la región, en los temas de producción de drogas, narcotráfico y lavado de dinero. En este terreno resulta de suyo evidente que no se puede aceptar una "globalización" que se constituya simplemente en una proyección del interés de una potencia dominante. Este es, quizás, el caso más evidente que, en la época de la globalización, la afirmación nacional y la fortaleza del Estado no deben entenderse como pasados de moda.

Por otra parte, este nuevo orden mundial ha transformado en dominantes las disputas económicas entre las potencias capitalistas. La hegemonía militar y política norteamericana no se

presenta a nivel económico. La crisis fiscal, el déficit comercial y la debilidad productiva de los EE.UU. contrasta con las capacidades económicas y tecnológicas de Japón, de Alemania e incluso de los nuevos países exportadores del Asia. Consecuentemente, aún cuando el libre comercio sea materia de teoría y de agitación propagandística en el mundo industrializado, la verdad es que las luchas comerciales han adquirido un carácter agudo en los últimos años.

Hay que reconocer, sin embargo, que esta nueva realidad política mundial presenta también aspectos positivos. En primer lugar, el término de la guerra fría ha cerrado las puertas a una tercera guerra mundial, aún cuando el auge de los nacionalismos y fundamentalismos religiosos han generado guerras locales y provocan incertidumbres y peligros derivados del menor control por el arsenal atómico, especialmente en los nuevos países de la ex URSS.

En segundo lugar, las nuevas tecnologías, especialmente la biotecnología, ingeniería genética y la explotación de los fondos marinos sientan bases potenciales para avances productivos de tal envergadura que podrían resolver el hambre y las necesidades básicas de toda la humanidad. Al mismo tiempo, los nuevos recursos existentes en el campo de las comunicaciones e informática amplían el potencial para una educación permanente, más diversificada, más efectiva, más flexible e informal. Sin embargo, frente a este potencial permanece la traba de la organización social capitalista, con sus exigencias de ganancias para el capital y la lógica del mercado que impiden que los recursos mundiales se distribuyan con el criterio de satisfacer las demandas de los más necesitados.

En tercer lugar, el término de los regímenes dictatoriales en los países del este, y en la mayor parte de los países del Tercer Mundo, unido a la globalización de las comunicaciones, ha producido la extensión casi universal de la democracia y de los derechos humanos. De hecho, ha surgido una conciencia muy vasta acerca del valor esencial del respeto a la persona humana y sus derechos fundamentales. Parte de esa conciencia se construyó gracias al movimiento de solidaridad con Chile que recorrió los cinco continentes. Por ello, el compromiso del socialismo chileno con la causa de los Derechos Humanos es parte esencial, insustituible e inmutable de nuestro ser partidario.

En este nuevo contexto global, los criterios que nos animan como Partido son los de afianzar y robustecer los intereses de las naciones pobres garantizando sus culturas e historias, sumar voluntades en pro de un mundo sin guerras, asegurar el respeto al ser humano, consolidando una amplia gravitación de las fuerzas progresistas y de izquierda.

## **América Latina en la Realidad Mundial**

En América Latina, luego de la "década perdida" para el desarrollo y de los regímenes militares, se inició el tránsito hacia la democracia representativa, con una estrategia económica, que siguiendo los cánones teóricos y de políticas económicas del mundo desarrollado, ha privilegiado el mercado y el estado mínimo.

El modelo económico y político neoliberal no ofrece un camino de estabilidad, seguridad y progreso para los ciudadanos de la región, ya que en la base de las dificultades latinoamericanas se encuentran graves factores estructurales, de larga data: el atraso económico, la desigualdad en la distribución del ingreso, la miseria, los problemas endémicos de vivienda, salud y educación. La persistencia de estos problemas, a los cuales en años recientes se agregan la corrupción y el narcotráfico en la mayor parte de los países, ocasiona falta de consenso y rechazo de amplios sectores de la sociedad civil al sistema político. Esta actitud, en la hora actual principalmente espontánea, fortalece el papel represivo del Estado, especialmente de su componente militar, lo que dificulta el proceso de asegurar las instituciones democráticas.

La estabilidad de la democracia en América Latina está, por lo tanto, vinculada al logro simultáneo de un crecimiento económico sostenido y a una distribución más justa de la riqueza. La democracia política será viable en la región si se vincula a cambios socio-económicos que abran camino a la satisfacción de las demandas y aspiraciones populares, sobre todo en un mundo globalizado en que la oferta consumista se presenta como un desafío cotidiano a través de los medios de comunicación.

La estabilidad democrática, el crecimiento económico y una justa distribución del ingreso requieren, por cierto, de adecuadas políticas económicas en cada país, pero, además, precisa, en un mundo internacionalizado, de una apropiada inserción. Somos partidarios que América Latina enfrente el nuevo orden mundial, sin vacilaciones, mediante su propia integración económica y a partir de ella concordar mejores condiciones para su participación en el sistema internacional. Los fundamentos históricos y culturales comunes en la región son bases sólidas que, unidas a políticas económicas similares y a afinidades políticas, debieran concretar el sueño bolivariano a comienzos del próximo siglo.

### **Concertación, y Transición a la Democracia Plena**

Los socialistas, junto a todos los partidos de la Concertación aceptaron una estrategia de transición gradual hacia la democracia. La estrategia adoptada probó su justeza al permitir la ampliación de los espacios políticos, así como la reposición de los principales poderes democráticos representativos del Estado, en particular la Presidencia de la República y el Parlamento. No obstante, es preciso reconocer que no ha sido posible materializar

plenamente las aspiraciones ciudadanas democráticas debido a que sobreviven enclaves autoritarios al interior del sistema político.

Asumiendo nuestra responsabilidad como partido de gobierno nos hemos empeñado en materializar las reformas constitucionales que permitan eliminar definitivamente del ordenamiento institucional aquellos resabios antidemocráticos, dejados por el esquema de poder del pasado régimen dictatorial. Esta no es una tarea fácil, ya que los temores ancestrales de la derecha, que se prohió bajo ese esquema, retienen una efectiva capacidad de bloqueo constitucional, como ha quedado demostrado con el boicot de estos sectores y de los poderes fácticos, a todas las iniciativas positivas que se han intentado para avanzar en la transición político-institucional.

La reforma del sistema electoral binominal, y su transformación en proporcional, junto a la eliminación de los senadores designados constituye un componente básico para devolverle a la ciudadanía sus derechos conculcados y garantizar una estabilidad a largo plazo del sistema político, en el cual todos los ciudadanos se sientan representados.

Por otra parte, la reforma del Tribunal Constitucional y del Consejo de Seguridad Nacional, tanto en lo relativo a la composición de ambos organismos, como respecto de sus atribuciones resulta fundamental. La inapropiada composición y atribuciones de estos organismos, antes que ser factores de estabilidad del sistema político, le introducen tensiones indebidas que lo debilitan.

En cuanto a las relaciones civiles y militares, la transición plena a la democracia pasa por la definitiva subordinación de las FFAA a la autoridad civil. Al respecto, el lento aunque sostenido proceso de aumento de la confianza entre civiles y militares, debiera culminar con las reformas constitucionales que eliminen la actual inamovilidad de los Comandantes en Jefe.

En este marco, la consolidación de la Concertación resulta fundamental, tanto para asegurar una mayoría nacional que pueda culminar una transición inconclusa, así como para avanzar hacia una sociedad en que primen la justicia y la equidad.

Tal orientación presupone realizar todos los esfuerzos que a nosotros corresponde para afianzar la unidad social y política del pueblo.

En este sentido, se requiere una decidida actitud de los socialistas tendiente a fortalecer la Concertación en la base, reconstituir el movimiento social y dinamizar la participación comunitaria con el objeto que su presencia y respaldo a las tareas democráticas contrarreste el poderío de los poderes fácticos, sean económicos o militares.

También es fundamental asumir plenamente nuestra condición de Partido popular y de Gobierno, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que las energías sociales provenientes del mundo popular se concreten y articulen con una acción gubernativa, capaz de atender las dramáticas urgencias que genera una sociedad con una distribución del ingreso muy desigual y con tendencias concentradoras y excluyentes.

Afianzar la Concertación en el mundo social debe apuntar, asimismo, a superar las manifestaciones de hegemonismo que se generan al interior de la coalición.

Los méritos históricos de los cuales el país se enorgullece nos pertenecen a todos. El conjunto de las fuerzas progresistas hemos bregado, estrechamente unidos, por la estabilidad democrática asumiendo sus beneficios y limitaciones. No corresponde que haya pretensiones sectarias que se arroguen los méritos que son propiedad de toda la Concertación y que, más allá de ella, constituyen un patrimonio histórico de toda la nación.

Somos y seremos concertacionistas, porque tenemos una vocación esencial: darle a Chile una democracia auténtica que permita a los trabajadores chilenos, especialmente a los más desposeídos y, por cierto a todos los habitantes del país una vida más digna, libre y feliz.

### **Consolidación Democrática**

Cumplidas las tareas de la transición, la consolidación democrática en el plano político-institucional demanda la atenuación del presidencialismo, restituyendo los poderes y funciones cercenados al Parlamento por la Constitución de 1980, principalmente en materias de fiscalización del Ejecutivo e iniciativa legal.

La consolidación democrática demanda también el fortalecimiento del sistema de partidos, de manera tal de asegurar su capacidad de representación política en la intermediación entre el estado y la ciudadanía. En este sentido se precisa la reestructuración del sistema electoral según la regla proporcional, el financiamiento de los partidos para campañas electorales, así como mecanismos institucionales más apropiados para las prácticas coalicionales.

Asimismo, el país requiere una verdadera integración de civiles y militares en la defensa nacional con una concepción democrática y moderna que comprometa, con efectividad, a toda la nación.

Los socialistas creemos necesario profundizar la democracia en todos sus niveles, para lo cual es preciso desarrollar formas directas de participación ciudadana. No nos quedamos satisfechos con alcanzar la plena democracia representativa. En este sentido, la participación local de los ciudadanos en los asuntos que directamente le competen, así como su participación regional y

nacional, mediante plebiscitos y referendums en temas trascendentes de carácter político y moral, resultan fundamentales en una sociedad moderna.

En este sentido, la descentralización real del poder en favor de los municipios y las regiones no sólo importa para alcanzar una mayor eficiencia en la gestión económica y una mejor utilización de los recursos humanos y materiales, sino principalmente para fortalecer las organizaciones de base de la sociedad, garantizar su participación y consultar su opinión sobre las grandes decisiones locales y nacionales.

En definitiva, la democracia plena debiera cristalizar en un Estado Social de Derecho, descentralizado, participativo, eficiente y transparente, con un régimen político equilibrado y con capacidad de incorporar a la división clásica de los tres poderes, nuevas instituciones públicas y autónomas, tales como la Contraloría o el Defensor del Pueblo, nuevas entidades reguladoras de la actividad privada y, desde luego, favorecer y promover todas las iniciativas de la sociedad civil que fortalecen la participación ciudadana.

### **Una Economía para Todos**

Así como en lo político vivimos una fase de transición a la democracia, en lo económico también estamos experimentando un período de tránsito en el cual, aún cuando persisten rasgos del modelo neoliberal, existen iniciativas económicas y sociales que tienden a modificarlo. No se puede decir que las políticas públicas del gobierno democrático sean las mismas que impulsó el régimen militar, aún cuando en su contenido popular puedan ser insuficiente.

Hemos enfrentado, y seguiremos enfrentando a la derecha y su concepción neoliberal que asocia de forma mecánica, y equivocada, la modernidad con el mercado y la competencia, lo que, lamentablemente, ha alcanzado un cierto nivel de aceptación en la conciencia nacional. El absolutizar el mercado e insistir en una desregulación extrema, debilitando el Estado, termina por promover un tipo de liberalismo que, en definitiva, no construye mercados verdaderamente competitivos.

A partir del gobierno democrático del Presidente Aylwin, se han desarrollado esfuerzos para enfrentar, principalmente, los graves problemas sociales heredados del régimen anterior. Las iniciativas en educación, salud y aquellas orientadas a superar la pobreza en las comunas más marginalizadas son expresiones importantes de voluntad política para atacar la exclusión y la injusticia social que caracterizó el modelo económico oligárquico del régimen de Pinochet.

Por otra parte, no cabe duda que el manejo macroeconómico y sus resultados se han mostrado más favorables bajo el régimen democrático, lo cual demuestra dos cosas. Por una parte, que la estabilidad democrática favorece un comportamiento más positivo de los agentes económicos externos e internos. Por otra parte, hay que destacar que los políticos y técnicos de la Concertación han probado tener un mayor talento en el manejo macroeconómico, en condiciones que los trabajadores demandan legítimamente la restitución de las pérdidas de poder adquisitivo que les impuso la dictadura, mientras el gobierno utiliza el diálogo y no la represión para impulsar su política económica.

En efecto, en los años 1990-95 la tasa de crecimiento del producto ha sido superior a todo el período de auge económico de la dictadura, vale decir 1984-89, con una sostenida reducción de la inflación, que alcanzó la cifra inédita de un dígito en los dos últimos años; las exportaciones han crecido sistemáticamente y los flujos de inversiones extranjeras han tenido un notable dinamismo, fortaleciendo la posición de reservas del país; las tasas de ahorro e inversión se han acercado a los promedios de los países asiáticos de crecimiento dinámico; las exportaciones de capitales desde Chile a los países vecinos han crecido de forma sorprendente; el desempleo se ha reducido a grados muy inferiores al de los países desarrollados y, en los últimos seis años, se ha producido un crecimiento sólido de los salarios reales.

Sin embargo, estamos convencidos que el modelo económico y su basamento central, la inserción internacional, deben mejorar. En efecto, observamos la existencia de limitaciones para nuestra oferta en los mercados mundiales, ya que presenta serias debilidades para superar su carácter primario-exportador. Este es un aspecto central de la modernización progresista que postulamos. Nuestra oferta exportadora no incorpora suficiente valor agregado nacional, ni tampoco una gran cantidad de conocimientos, desarrolla encadenamientos aún limitados con el resto de los sectores productivos, con incapacidad para arrastrar aumentos de demanda intermedia y, tampoco, estimula mejoramientos en la calidad de fuerza de trabajo. Por otra parte, desde el punto de vista de la demanda internacional, nuestras exportaciones no se encuentran en las ramas más dinámicas del comercio internacional, con obvias inestabilidades de precios, lo que coloca frenos a la dinámica exportadora y limitaciones potenciales a los ingresos de divisas.

De tal manera, el proceso de superación del período de transición económica para alcanzar un modelo alternativo- fundado en el trabajo y en el conocimiento- requiere ajustes en el sector productivo exportador. Nuestra insistencia en avanzar hacia una segunda fase exportadora es parte de esta propuesta. No es posible continuar sustentando el dinamismo de las exportaciones en bajos salarios o en un tipo de cambio real elevado. Este último factor ya se ha agotado y el primero no lo podemos aceptar socialmente. Tampoco es posible aceptar una dinámica exportadora con depredación

de recursos naturales y deterioro del medio ambiente, cuando la pesca se agota, el bosque nativo se deteriora y los recursos minerales se reducen, al mismo tiempo que los chilenos demandan respeto por sus condiciones de vida y las generaciones venideras se merecen un futuro digno.

Modernizar el país exige el replanteamiento de la inserción económica internacional de la economía chilena, desde un modelo fundamentalmente primario exportador, hacia un modelo que privilegie la exportación de valor agregado, incorporando mayor conocimiento e inteligencia en los procesos de producción de bienes y servicios. Demanda, además, una decidida voluntad política y acciones concretas de política económica, con intervención decidida del estado y con metas de largo plazo. Se requiere, en definitiva, una estrategia de desarrollo nacional que supere la autocomplacencia coyunturalista y la inacción frente al mercado.

En el plano productivo, la transformación en favor de una segunda fase exportadora requiere que la competitividad no sea considerada exclusivamente desde el punto de vista de las empresas competitivas, sino del conjunto de la economía. Hay que desarrollar una competitividad general, de todo el sistema económico, y no sólo confiar en la presencia internacional de unas pocas empresas poderosas que controlan un alto porcentaje del valor exportado nacional.

Un modelo productivo exportador de segunda fase requiere modernizaciones urgente en el plano laboral y social. Es verdad que en el período democrático ha aumentado el empleo y que los salarios han tenido un crecimiento real. Sin embargo, la distribución del ingreso, deteriorada notablemente en el período militar, se mantiene en niveles que caracterizan a Chile con una de las distribuciones de ingreso más regresivas del mundo, sólo superado por Brasil. Una mala distribución del ingreso, la persistencia de salarios aún bajos y la presencia de considerables bolsones de pobreza no ayudan al mejoramiento sistémico de la competitividad, desaprovechando el potencial productivo de un vasto contingente de la población chilena.

A la desigual distribución del ingreso se agrega una relación extremadamente jerárquica al nivel de la empresa, en que los sindicatos son percibidos por los empresarios como una amenaza y no como una contraparte necesaria para la expansión de la actividad económica. Esta concepción exige un replanteamiento de la relación entre empresarios y trabajadores.

Un nuevo tipo de relación entre trabajadores y empresarios, acorde al mundo moderno, de respeto y reconocimiento mutuo de los aportes de cada cual, es especialmente importante para enfrentar con éxito los permanentes requerimientos de transformación y flexibilidad productiva, que exige el mercado mundial.

En primer lugar, un nuevo tipo de relación entre empresarios y trabajadores demanda un compromiso a nivel de la empresa que permita el desarrollo y extensión de los sindicatos, la existencia de mecanismos de participación, el reparto equitativo de los aumentos de productividad entre el capital y el trabajo, así como negociación colectiva en temas tales como productividad, modernización tecnológica, inversiones y medio ambiente.

En segundo lugar, se requiere un estilo moderno de organización del trabajo en el cual el asalariado no solo sea un mero ejecutante de tareas sino un planificador de las mismas, en el cual el trabajador se apropie de los procesos productivos, los considere parte suya y adquiera un real conocimiento de las tecnologías.

En definitiva, integrar y no excluir es la lógica que nos inspira para materializar una modernización integradora. Esta requiere un acuerdo estratégico entre empresarios y trabajadores, con el respaldo del Estado, no sólo para negociar salarios, sino para coparticipar en los procesos productivos, con compromisos conjuntos en los aumentos de productividad, adaptación de nuevas tecnologías y en la búsqueda de la calidad.

Adicionalmente, las exigencias de justicia social colocan al tema de los ingresos mínimos y el seguro de desempleo en la agenda nacional. Es preciso, al más breve plazo, establecer un sistema de Ingresos Mínimos de Reconversión, el que junto al mejoramiento de la legislación laboral otorgará una "estabilidad dinámica del empleo". Tanto la experiencia del carbón, como la que se producirá con la agricultura tradicional, requieren de un sistema de salarios mínimos de desempleo y reentrenamiento de los trabajadores que le permita a los empresarios la reconversión, pero que no deje en la indefensión a los trabajadores.

Paralelamente, una modernización efectiva de la economía, que mejore la competitividad del conjunto del sistema, precisa aumentar sustancialmente la inversión pública y privada en investigación científica y tecnológica y articular un sistema nacional que aproveche toda la inteligencia del país, coordinando y apoyando los programas de inversión.

Desde luego, una estrategia de desarrollo que mejore las relaciones entre las personas, y en la cual impere la justicia social, no puede excluir la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. El modelo exportador de Chile, al fundarse principalmente en materias primas y alimentos, encuentra serios problemas de sustentabilidad a mediano plazo. Aunque los poderes empresariales oculten esta realidad y el sector público tenga una actitud débil sobre el particular hay que reconocer que no sólo se está contaminando el agua, el aire y el suelo -como es de suyo evidente en Santiago, donde se ahogan los niños y las personas se neurotizan en medio de un tráfico desesperante- sino se está agotando la pesca, se encuentra semianiquilado el bosque nativo y

los recursos minerales se extraen sin contabilización alguna, sin respetar el derecho de las generaciones venideras.

Los socialistas asumimos prioritariamente la defensa del tema del medio ambiente. En primer lugar, porque la degradación ambiental, causada por la actividad industrial, extractiva y manufacturera, afecta a toda la sociedad. Actualmente los damnificados por este flajelo no reciben indemnización alguna por la contaminación y el despilfarro de recursos y, además, tienen que hacerse cargo de los costos de protección o restauración. Desde luego, el mercado no tiene la capacidad de incorporar en su lógica la protección del medio ambiente y, al no hacerlo, se genera una adicional redistribución regresiva de los ingresos de los sectores pobres en favor de los ricos.

En segundo lugar, el agotamiento de los recursos naturales afecta la equidad intergeneracional, ya que al explotar en el presente de forma indiscriminada los recursos naturales, se les reduce a las generaciones venideras la posibilidad de generar ingresos en el futuro.

Así como el sistema político requiere descentralización para profundizar la democracia, el desarrollo económico plantea una demanda similar. En efecto, aún cuando el motor dinamizador del modelo económico han sido las exportaciones, y éstas han estado basadas principalmente en la explotación de recursos naturales, con una distribución espacial relativamente desconcentrada, resulta paradójico, e inaceptable, el centralismo de la economía chilena.

Los recientes esfuerzos de desconcentración y descentralización han aumentado la inversión en infraestructura, salud y educación. Sin embargo, persisten en las regiones limitadas oportunidades de empleo para los jóvenes, mientras los profesionales son escasos, los servicios son precarios, muchas zonas permanecen aisladas y hay carencias de infraestructura y servicios para la producción.

Esta situación no puede continuar. Es preciso diseñar una política de largo plazo y actuar consecuentemente, con iniciativas que estimulen el desarrollo productivo de las regiones, convirtiéndolas en polos de desarrollo, que no sólo retengan a sus habitantes, sino que, en lo posible, estimulen procesos migratorios desde la capital hacia ellas.

En resumen, los socialistas estamos por imprimir un nuevo norte al proceso de modernización económica. Para ello, hay que colocar la fuerza de la inteligencia y del conocimiento en el centro de los procesos productivos, favoreciendo así la competitividad e inserción exportadora. Ello exige, consecuentemente, un mejoramiento general de la calidad del trabajo y, por tanto, de la capacitación de los trabajadores, así como un acceso democrático al sistema educacional, en todos los niveles, independiente de las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos. Por otra

parte, la superación de las relaciones patriarcales al nivel de la empresa y la participación de los trabajadores en éstas facilitará los aumentos de productividad y potenciará la utilización y adaptación de nuevas tecnologías. Todo esto, en un marco consistente de defensa del medio ambiente y de protección de los recursos naturales, promoverá la competitividad general del sistema, con un posicionamiento de las exportaciones chilenas más rentable, más estable y duradero en los mercados internacionales. En tales condiciones la modernización sí podrá beneficiar a todos los chilenos. Sólo así podremos construir un país en el cual cada ciudadano tenga su espacio en la sociedad y en el que se identifique la historia individual de cada cual con la historia de la nación.

### **La Sociedad, los Valores y los Jóvenes**

La globalización, los valores impuestos por el régimen militar y el neoliberalismo, las exigencias del mercado, la inseguridad en el trabajo, así como la inexistencia de una utopía social trascendente ha generado una fuerte introspección de los chilenos hacia el trabajo y la familia, con predominio de los proyectos individuales.

El mundo social, la vida sindical, las luchas universitarias, las movilizaciones callejeras, la vida partidaria, han sido reemplazadas por mayor televisión de los adultos, el "carreteo" de los jóvenes y la aspiración del universitario a un postgrado en administración de negocios en Estados Unidos.

Es preciso entender las razones de la desafección política, especialmente en los jóvenes para poder actuar en consecuencia.

En primer lugar, el cambio de época, que ha incluido el fracaso de los socialismos reales y el descubrimiento de su naturaleza represiva, le ha dado una percepción a los jóvenes de que ya no existen utopías viables. En cierto sentido, los jóvenes no ven alternativas de un mundo mejor, lo cual es traumático para su sentido natural de rebeldía.

En segundo lugar, los jóvenes se alejan de la política al constatar que los partidos, sin ideologías claras, se encuentran aparentemente interesados sólo en la administración del poder, con objetivos de largo plazo poco claros y con acciones de corto plazo que a los jóvenes no les parecen muy nobles.

La centralización del poder en los partidos, en torno a un reducido grupo de dirigentes, es rechazado por los jóvenes porque ello se percibe como otra forma de desigualdad de oportunidades y, representa, en los hechos, una expropiación del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

En tercer lugar, el capitalismo actual impone más rudas y exigentes

aspiraciones a los jóvenes. En los de altos y medianos ingresos la conquista del éxito, sin condiciones, se ha convertido en propósito compulsivo. Alcanzar una institución de educación superior y luego un posgrado en universidades extranjeras se les presenta a los jóvenes como condición indispensable para ingresar a un trabajo que de respuesta a los requerimientos del consumo y bienestar que impone el mundo moderno. Para el fracaso no hay compasión y los perdedores son tratados con implacable desprecio. En los jóvenes de bajos ingresos, el "éxito" se asocia al consumo suntuario, al aparato electrónico, al vehículo comprado a "toda costa". Esta percepción del éxito se encuentra reforzada por una publicidad y un sistema de comunicaciones globalizado que hace crecer las aspiraciones mucho más allá de las posibilidades materiales que ofrece nuestro país. De tal manera, el aumento del crimen en los adolescentes, la violencia insensata y el consumo de neoprén y pasta base en los niños sin esperanza no pueden sorprender, ya que son el resultado lógico de una economía y una cultura que todavía no hemos sabido contrarrestar social y políticamente.

Finalmente, los temas de la política contingente no parecen relacionados, ni remóticamente, con los intereses inmediatos de la juventud. El embarazo adolescente y el aborto son parte de los tabues nacionales. El divorcio sigue asustando a los fundamentalistas de doble moral, mientras las mujeres deben sufrir la golpiza del machismo cobarde y la desprotección de la mujer jefa de hogar. El medio ambiente, en la práctica, no es tomado muy en serio. La pacatería nacional impide una discusión sobre la sexualidad y el sexo, lo cual además tiene repercusiones en la salud nacional. La censura televisiva ha adquirido ribetes insostenibles. Las críticas o las propuestas alternativas al servicio militar son descalificadas por los poderes fácticos y se archivan.

La construcción de una moral social compartida, con sólidas bases de integración, que valore las virtudes de una vida personal y de sus compromisos, requiere de un debate público profundo que se haga cargo de los problemas contemporáneos como el divorcio, el aborto, la sexualidad y que entregue alternativas a los jóvenes sobre el servicio militar.

La familia, las relaciones de pareja, la afectividad y la sexualidad tienen, en el presente, una influencia central en los cambios culturales ocurridos, así como en las veloces transformaciones económicas y sociales. Desconocer esta realidad y pretender imponer un modelo abstracto de familia que no representa la diversidad de situaciones es discriminar a una importante parte de nuestra población. Debemos apoyar jurídicamente la libre y responsable opción de los adultos en los ámbitos de la vida privada, cautelando la igualdad de derechos y oportunidades de todos los hombres y mujeres de nuestro país, especialmente niños y jóvenes.

En definitiva, aunque el desinterés político tiene razones poderosas que van más allá de nuestra voluntad, los socialistas tenemos la aspiración de construir una sociedad libertaria, impulsar los valores progresistas, apoyar especialmente la rebeldía y demandas de la juventud, estableciendo canales orgánicos para su participación política y acentuar su papel en las estructuras de dirección del Partido Socialista y del conjunto de la sociedad.

### **La Participación Igualitaria de las Mujeres**

Si bien el tema de la mujer y su visibilidad ha aumentado considerablemente en el mundo de hoy y las demandas de las mujeres han pasado a formar parte de la agenda pública, su condición de subordinación y discriminación aún subsiste. Así lo demuestra, entre otras cosas, la subrepresentación en los cargos de decisión en el país y en la militancia partidaria.

Los socialistas estamos convencidos que mientras se alcancen altos niveles de equidad y simetría en las relaciones entre hombres y mujeres, y no se igualen derechos y oportunidades, no habrá plena democracia.

Promovemos, por tanto, avanzar decididamente en el reconocimiento del derecho de las mujeres a la plena ciudadanía, lo cual, como se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, significa no sólo tener derechos formales y conocerlos, sino también poder para ejercerlos. De allí la necesidad de erradicar los múltiples mecanismos a través de los cuales opera la discriminación y, por cierto, nuestro primer compromiso es realizarlo al interior de nuestro partido, promoviendo plenamente el acceso de la mujer a cargos de representación popular y de dirección.

Constituyen tareas prioritarias para los socialistas el promover los derechos sexuales y reproductivos; el aborto terapéutico y la discusión sobre su despenalización; el reconocimiento de los diversos tipos de familia; el divorcio vincular; el derecho a igual remuneración por el mismo trabajo; la capacitación para una inserción laboral no discriminatoria; el fortalecimiento de programas de apoyo a las mujeres jefas de hogar, mujeres indígenas, adultas mayores y adolescentes, incorporando la perspectiva de género en la lucha contra la pobreza.

Impulsaremos el vasto cambio cultural que requiere nuestra sociedad, oponiéndonos al pensamiento conservador, que perpetúa la desigualdad de género. Promoveremos la paridad de deberes y derechos al interior del hogar, e impulsaremos el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.

Sabemos que no basta con incorporar en el discurso la necesidad de cambiar la condición de la mujer. Asumimos el reto de unir nuestro discurso con una práctica coherente para ser efectivos impulsores

del cambio social, cultural y político que suprima toda forma de discriminación de la mujer y asegure sus derechos a una plena ciudadanía.

### **El Pensamiento Socialista**

La derrota del modelo de los países del este y las dificultades por las que atraviesa el pensamiento progresista, no pueden hacernos renunciar a la reivindicación por la igualdad social que encarnan las ideas socialistas. Es precisamente porque persisten las desigualdades que caracterizan al sistema capitalista, discriminando las oportunidades de los individuos en su inserción en la sociedad, es que nuestra lucha no ha terminado. Por ello el humanismo que compromete nuestra razón de ser es aquel que arranca de un compromiso por la justicia, que abomina de las desigualdades existentes y que se confunde en la reivindicación de una vida más bella, más digna y amante de la naturaleza.

El socialismo no debe ser concebido, como lo fue en su momento, la utopía de una sociedad que eliminó todas sus contradicciones, sino como un proceso para favorecer la libertad de cada ser humano, superar las desigualdades, socializar el poder, ejercer el control democrático de las instituciones y generar condiciones materiales, sociales y culturales para que la gente pueda, libre y solidariamente, decidir sobre su vida y el futuro de la sociedad.

El proyecto socialista asume, entonces, el punto de vista de los explotados, los oprimidos, los excluidos, los dominados. Sin embargo, pretende representar también al conjunto de la sociedad, ya que su propuesta es liberadora de todos aquellos que, hoy día, fundan su vida en la acumulación de riquezas materiales y en la demanda incesante de bienes de consumo suntuario.

Consecuentemente, el socialismo democrático chileno es la propuesta más válida de superación de los desafíos de nuestra sociedad y el horizonte de mayor esperanza no sólo para quienes sufren alguna forma de dominación, sino para todos los que aspiran a condiciones más humanas de vida.

Hoy día reconocemos que el pensamiento socialista democrático se ha visto enriquecido no solo por su experiencia práctica, a nivel local y mundial, sino por la valoración de distintas corrientes intelectuales que se incorporan a su cuerpo doctrinario. Desde luego, seguimos asumiendo la crítica al sistema capitalista y a sus efectos sociales proveniente del marxismo. Pero, recogemos con la misma fuerza toda la tradición del liberalismo político, así como las concepciones humanistas y libertarias y los principios éticos provenientes de la tradición cristiana y la vocación transformadora del cristianismo popular. El patrimonio y la propuesta socialista no se limita a ninguna de estas corrientes doctrinarias, reconociendo el aporte de cada una y el espacio para todas ellas

en la conformación de un movimiento plural, que tiene como horizonte los principios de la igualdad, la libertad, la solidaridad y la autorrealización de los seres humanos.

Los socialistas queremos reconstruir la capacidad de soñar. Es cierto que los sueños de hoy son distintos a los de ayer. Pero éstos no han terminado, porque la aspiración de los seres humanos a una sociedad mejor es parte de su condición.

Para nosotros sigue vigente la necesidad de la transformación, aún cuando hoy no consideremos que ésta provenga de un destino ineluctable como lo vaticinó el esquema prevaleciente durante muchos años en el movimiento socialista mundial. No es, en efecto, posible un curso lineal del desarrollo de la historia, ni tampoco es sostenible pensar que se podrá organizar el futuro de acuerdo a una plan preconcebido. Pero esto tampoco niega la influencia protagónica de los hombres en su propio destino y el de la sociedad en que participa. Nuestro pensamiento debe servir para alcanzar la justicia social, en democracia. No se propone cambiar un dogma por otro, por ello debe ser abierto, libre de prejuicios y profundamente crítico de la sociedad y de sí mismo.

Instamos a los socialistas a seguir avanzando en la construcción de un pensamiento político transformador pero no integrista, capaz de reproducirse y evolucionar permanentemente; un pensamiento innovador pero no oportunista; de profundo contenido social pero no asistencialista; amplio, tolerante y pluralista; un pensamiento político capaz de impulsar la diversidad cultural y social pero no complaciente con la explotación de los trabajadores ni con la arrogancia de las nuevas oligarquías.

Santiago, 3 de Mayo de 1996